

Estimado señor León Fabián,

A raíz de su solicitud de participación en los temas incluidos en el libro, queremos compartir nuestra posición sobre el tema tanto desde la perspectiva del plan nacional de descarbonización de Colombia, como desde la perspectiva del desarrollo local y los derechos de las comunidades impactadas.

Manteniéndonos totalmente disponibles para proporcionar todas las aclaraciones.

Cordial saludo,

E

<https://www.edp.com/es/derechos-humanos>

Proyectos de EDPR en Colombia

Colombia está dando pasos históricos hacia la meta de ser neutral en carbono para 2050. Como uno de los nueve países latinoamericanos que trabajan para lograr un objetivo del 70 por ciento de uso de energía renovable para 2030, Colombia tiene como objetivo contribuir con 4 gigavatios de energía renovable a su combinación energética total apoyando la meta regional 2030. Con sus objetivos de energía renovable y una proporción cada vez mayor de recursos eólicos y solares, Colombia está diseñando un futuro sistema de energía que es fundamentalmente diferente al actual, que utiliza nuevas tecnologías, acepta nuevos actores e inversionistas y crea nuevas oportunidades para mejorar la energía, seguridad, asequibilidad y confiabilidad.

En este contexto, y como hito histórico, en 2019 se realizó la primera subasta de largo plazo de fuentes renovables no convencionales en Colombia, adjudicando 2,2 GW de capacidad de generación solar y eólica con el objetivo del Gobierno Nacional de dar un mayor paso en la política de transición energética.

En esta subasta organizada por el Gobierno de Colombia, EDPR consiguió dos contratos a 20 años para la construcción de dos parques eólicos, lo que permitió a la Compañía entrar en el mercado colombiano por primera vez. Los contratos se refieren a los proyectos eólicos terrestres Alpha (212 MW) y Beta (280 MW), que actualmente se encuentran en desarrollo.

La región de La Guajira, sede de los seis proyectos eólicos adjudicados en la subasta (incluidos los dos proyectos de EDPR) y cercana a 4 GW de otros proyectos de energías renovables no hidroeléctricas registrados, históricamente ha sido marginada y pobre energéticamente. La pobreza energética de la provincia ha provocado la oposición de la comunidad a los proyectos de energía renovable a gran escala, y algunos proyectos se han detenido. Por lo tanto, el despliegue de activos renovables en la región debe incluir evaluaciones de impacto ambiental y socioeconómico en las comunidades locales. Esto se puede hacer fomentando la participación de la comunidad local, incluida la consulta sobre permisos y desarrollo de proyectos.

Además, algunos proyectos, incluidos los de EDPR, se encuentran en áreas de Reservas Indígenas, territorios de carácter colectivo en los que se pueden desarrollar proyectos mediante compensaciones acordadas en consultas previas. Tomando esto en consideración, hemos estado en contacto con las comunidades locales desde nuestro ingreso al mercado colombiano, trabajando de cerca con ellas y participando en diferentes iniciativas en el país.

EDPR está especialmente activo en la región de La Guajira en la que los wayuu (etnia indígena americana) están presentes, y donde contamos con un equipo social local de 7 personas con experiencia previa específica en las relaciones y consulta previa con las comunidades wayuu, complementado por un equipo de 20 contratistas de los cuales 18 son Wayuus, asegurando que tenemos una estrecha conexión y comprensión de la realidad.

Como se dijo, la consulta previa es un derecho fundamental que tienen las etnias en Colombia para poder decidir sobre medidas (legislativas y administrativas) o proyectos, obras o actividades que se van a realizar dentro de sus territorios, con el fin de proteger su integridad cultural, social y económica, y garantizar el derecho a la participación. Es un proceso obligatorio que debe realizarse antes de la ejecución de un proyecto que pueda afectar sus condiciones de vida a través de un diálogo bidireccional con las comunidades. De la consulta previa surgen algunos compromisos con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos generados por el proyecto en los territorios, los cuales se determinan a través de talleres de identificación de impactos.

EDPR siguió este proceso con la aquiescencia y la presencia del Ministerio del Interior, cumpliendo con todas las obligaciones legales y los procedimientos de debida diligencia aplicables, como estudios de impacto y consultas previas con las comunidades locales, y asegurándose de que los contactos y acuerdos formales de la empresa con las comunidades se hacían siempre con la Autoridad Tradicional registrada.

Sin embargo, luego de este proceso, surgieron conflictos internos entre los miembros de una comunidad, causando una fatalidad. Esto resultó en que los miembros de la comunidad se mudaran provisionalmente fuera del territorio por motivos de seguridad. Creemos importante aclarar que el conflicto y consecuente desplazamiento fueron causados por diferencias entre miembros del territorio, y que EDP y sus empleados nunca han hostigado, ejercido presión o forzado escenario alguno hacia las comunidades. No obstante, estamos implementando una estrategia para que las familias afectadas se beneficien del proyecto.

Se espera que los proyectos tengan varios otros beneficios para las comunidades locales, como la creación de empleo local (actualmente, el 60% de la fuerza laboral es del Departamento de La Guajira) y el acceso al suministro de electricidad renovable a través de “comunidades solares” en algunos países. La distribución de energía en la región es responsabilidad del Gobierno colombiano, pero se establecieron compromisos dentro de los acuerdos de consulta previa para todas las etapas del proyecto para ayudar a lograrlo, como la construcción de plantas solares en el centro comunitario.

Además, producto de los acuerdos alcanzados con las comunidades y en nuestro esfuerzo por apoyar su desarrollo, nos comprometimos con un presupuesto de COP 66 mil millones (~15 millones de USD) por 30 años con el objetivo de incrementar la calidad de vida de las comunidades locales. y contribuir a su continuo desarrollo socioeconómico. En consecuencia, EDPR está trabajando en estrecha colaboración con las comunidades locales y participando en diferentes iniciativas en el país, especialmente en la región de La Guajira. Por ejemplo, EDPR contribuyó al Banco de Alimentos de Colombia en 2020 con una inversión de 83 millones de COP (~19 mil USD), y durante la pandemia de Covid-19 EDPR desempeñó un papel activo en la donación de material sanitario como mascarillas, geles, pruebas de detección , entre otros, para el municipio de Uribia (La Guajira), por un monto de COP 60 millones (~14 mil USD). Más recientemente, EDPR donó COP 100 millones (~23 mil USD) a la representación de la Cruz Roja Colombiana en La Guajira para ayudar a los afectados por la ola invernal que afectó a los municipios de Uribia, Maicao y Albania.

Tenga en cuenta que estos acuerdos con las comunidades se determinaron inicialmente considerando la cantidad de aerogeneradores instalados, y aunque hubo una revisión de la licencia de los proyectos para cambiar la cantidad de turbinas (para generar la misma energía con menos aerogeneradores pero más grandes), no habrá ningún ajuste al compromiso previamente asumido.

Por ello, con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre la comunidad y la Compañía, esperamos contribuir fuertemente a mejorar la calidad de vida de las zonas aledañas a los proyectos. También destacamos que el Estado Colombiano, a través de sus Ministerios (Ministerio del Interior y Ministerio de Minas y Energía), da seguimiento y monitoreo al avance del proyecto y al cumplimiento de los acuerdos establecidos con las comunidades. El apoyo del gobierno en la gestión y compensación a las comunidades locales es fundamental para acelerar la transición energética en Colombia y América Latina

En conclusión, la Compañía ha estado trabajando continuamente junto con el Gobierno y las comunidades locales para que nuestros proyectos puedan comenzar a operar y puedan beneficiarse de ellos lo antes posible.

ENGLISH VERSION

E

EDPR's projects in Colombia

Colombia is making historic strides toward the goal of being carbon neutral by 2050. As one of nine Latin American countries working toward a target of 70 percent renewable energy use by 2030, Colombia aims to contribute 4 gigawatts of renewable energy to its total energy mix supporting the 2030 regional goal. With its renewable energy targets and a growing share of wind and solar resources, Colombia is designing a future power system that is fundamentally different from that of today—one that uses new technologies, embraces new actors and investors, and creates new opportunities to enhance energy security, affordability, and reliability.

In this context, and as a historic milestone, the first long-term auction of non-conventional renewable sources in Colombia was held in 2019, allocating 2.2 GW of solar and wind power generation capacity with the aim of the National Government to take a major step in the energy transition policy.

At this auction organized by the Colombian Government, EDPR secured two 20-year contracts for the construction of two wind farms, allowing the Company to enter the Colombian market for the first time. The contracts refer to the Alpha (212 MW) and Beta (280 MW) onshore wind projects, which are currently being developed.

La Guajira region, home to the six awarded wind projects in the auction (including EDPR's two projects) and nearby to 4 GW of other registered non-hydro renewable energy projects, historically has been marginalized and energy poor. The province's energy poverty has triggered community opposition to large-scale renewable energy projects, and some projects have been halted. Renewable asset deployment in the region must therefore involve environmental and socio-economic impact assessments on local communities. This can be done by fostering local community participation, including consultation on project permitting and development.

Furthermore, some projects, including EDPR's, are in Indigenous Reservations areas – territories of a collective nature in which projects can be developed through compensation agreed upon in prior consultations. Taking this into consideration, we have been in contact with the local communities since our entry in the Colombian market, working closely with them and participating in different initiatives in the country. EDPR is especially active in the region of La Guajira in which the Wayuu (an Indigenous American ethnic group) are present, and where we have a social local team of 7 people with previous specific experience in relations and prior consultation with Wayuu communities, complemented by a team of 20 contractors of which 18 are Wayuus, ensuring we have a close connection and understanding of the reality.

As stated, prior consultation is a fundamental right that ethnic groups in Colombia have in order to be able to decide on measures (legislative and administrative) or projects, works or activities that are going to be carried out within their territories, with the aim of protecting their cultural, social, and economic integrity, and guarantee the right to participation. It is a mandatory process that must be carried out before the execution of a project that may affect their living conditions through a two-way dialogue with the communities. Some commitments emerge from the prior consultation with the purpose of preventing, mitigating, correcting, or compensating the impacts generated by the project in the territories, which are determined through impact identification workshops.

This process was followed by EDPR with the acquiescence and presence of the Ministry of Interior, complying with all legal obligations and applicable due diligence procedures such as impact studies and prior consultations with local communities, and making sure that the Company's contacts and formal agreements with the communities were always made with the registered Traditional Authority.

However, after this process, internal conflicts arose between the members of a community, causing one fatality. This resulted in community members to provisionally move out of the territory for safety purposes. We believe it is important to clarify that the conflict and consequent displacement were caused by differences between members of the territory, and that EDPR and its employees have never harassed, exerted pressure or force any scenario towards the communities. Nonetheless, we are implementing a strategy so that the families affected benefit from the project.

The projects are expected to have several other benefits for the local communities, such as local job creation (currently, 60% of the labour force is from the Department of La Guajira), and access to renewable electricity supply through “solar communities” in some areas. The distribution of energy in the region is the responsibility of the Colombian Government, but commitments were established within the prior consultation agreements for all stages of the project to help achieve this, such as the construction of solar plants in the community centre.

In addition, resulting from the agreements made with the communities and in our efforts to support their development, we committed to a budget of 66 billion COP (~15 million USD) for 30 years with the objective of increasing the quality of life of local communities and contribute to their continued socio-economic development. Accordingly, EDPR is working closely with local communities and participating in different initiatives in the country, especially in the La Guajira region. For example, EDPR contributed to the Colombian Food Bank in 2020 with an investment of 83 million COP (~19 thousand USD), and during the Covid-19 pandemic EDPR played an active role in donating sanitary materials such as masks, gels, detection tests, among others, for the municipality of Uribia (La Guajira), amounting to 60 million COP (~14 thousand USD). More recently, EDPR donated 100 million COP (~23

thousand USD) to the representation of the Colombian Red Cross in La Guajira to assist those affected by the winter wave affecting the municipalities of Uribe, Maicao and Albania.

Please note that these agreements with the communities were initially determined considering the number of wind turbines installed, and even though there was a review of the license of the projects to change the number of turbines (to generate the same energy with fewer but larger wind turbines), there will be no adjustment to the commitment previously made.

Therefore, by complying with the agreements reached between the community and the Company, we hope to strongly contribute to improving the quality of life of the areas surrounding the projects. We would also highlight that the Colombian State, through its Ministries (Ministry of the Interior, and Ministry of Mines and Energy), follows up and monitors the progress of the project and compliance with the agreements established with the communities. Government support in management and compensation to local communities is essential to accelerate the energy transition in Colombia and Latin America

In conclusion, the Company has been continuously working together with the Government and the local communities so that our projects can start operating and so they can further benefit from them as soon as possible.



Eduardo Moura
Sustainability Global Unit
Economic & Social

T (+351)968775352
Av. 24 Julho, 12 Lisboa Portugal